



La presente obra está bajo una licencia:
Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra
hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

El derecho a la pensión de sobrevivientes en las familias de crianza en Colombia.

Mauricio Villamizar¹.

Resumen.

La pensión de sobrevivientes se desprende como consecuencia del fallecimiento de una persona y tiene como objetivo, el salvaguardar a quien tenga derecho a recibirla frente a las eventualidades que se puedan suscitar en virtud de este hecho. Por lo tanto, es un derecho que se encuentra conexo a la protección de otras prerrogativas fundamentales que son protegidas por la Constitución Política, no obstante, para poder acceder a ella se requiere cumplir por ley con ciertos requisitos, es así, que los hijos de crianza no tenían derecho a recibirla pues no cumplían con las exigencias de la norma. Sin embargo, esta situación cambió gracias a la protección que ha brindado la Corte Constitucional hacía las nuevas formas de conformación de la familia como pilar fundamental de la sociedad.

Palabras claves: Familia, Hijos de Crianza, Pensión de Sobrevivientes, Derechos Fundamentales, Protección, Colombia.

¹ Estudiante de derecho Universidad Católica de Colombia, facultad de derecho, programa de pregrado. Artículo reflexivo para optar al título de abogado, correo institucional mvillamizar40@ucatolica.edu.co, director: Dr. Luis Fernando Vallecilla Baena, profesor titular de la catedra de derecho laboral.

The right to survivors' pensions in the upbringing families in Colombia.

Abstract.

Mauricio Villamizar.

Survivors' pensions arise as a result of the death of a person and have as their objective the safeguarding of those who are entitled to receive it in the face of any eventualities that may arise from this fact. Therefore, it is a right that is related to the protection of other fundamental prerogatives that are protected by the Political Constitution, nevertheless, in order to be able to accede it is necessary to fulfill by law with certain requirements, it is thus, that the children of Were not entitled to receive it because they did not comply with the requirements of the standard. However, this situation changed thanks to the protection provided by the Constitutional Court to the new forms of family formation as a fundamental pillar of society.

Keywords: Family, Children of Foster Care, Survivors' Pension, Fundamental Rights, Protection, Colombia.

Sumario.

Introducción.

1. El concepto de familia de acuerdo con la doctrina y con la Corte Constitucional colombiana.

1.1. El hijo y la familia de crianza.

2. La pensión de sobrevivientes.

2.1. Beneficiarios y requisitos para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes en el Régimen General de Pensiones de la ley 100.

3. La pensión de sobrevivientes en las familias de crianza.

3.1. La pensión de sobrevivientes para los hijos de crianza.

3.2. La pensión de sobrevivientes para los padres de crianza.

Conclusiones.

Referencias.

Introducción.

La pensión de sobrevivientes es una prestación económica que se otorga a aquellos beneficiarios del pensionado o afiliado a un régimen pensional que ha fallecido. A su vez, los individuos que tienen derecho a recibirla han sido señalados taxativamente por la ley y su función consiste en salvaguardarlos y protegerlos frente a las eventualidades que puedan afectarlos de forma gravosa debido al fallecimiento de su familiar.

Frente a la pensión de sobrevivientes, Andrade, Marín y Medina (2013) se expresaron de la siguiente manera:

La finalidad de esta institución es evitar que las personas allegadas al pensionado fallecido o con derecho a la pensión, teniendo en cuenta que ya han demostrad[o] la relación sostenida en vida, y la convivencia permanente bajo el mismo lecho, puedan quedar por el hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección que tenían en vida del causante. (p. 12)

En el mismo sentido, Aristizábal (2015) citando a Martínez (2009) expresó que la pensión de sobrevivientes es “uno de los mecanismos instituidos por el legislador para garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones a sus beneficiarios” (p. 5).

Por lo tanto, se entiende que la pensión de sobrevivientes es una medida de protección económica que se otorga a los beneficiarios del pensionado o afiliado fallecido. Garantizando de esta forma, que los mismos puedan sortear los posibles escenarios de desamparo al que puedan verse inmersos con motivo del fallecimiento de su familiar, situación que de no evitarse traería tras de sí, la vulneración de derechos de categoría superior que se encuentran protegidos por la Constitución.

Ahora bien, la ley dispone que quienes tienen derecho a recibir la pensión de sobrevivientes son los cónyuges, compañeros o compañeras permanentes, los hijos, los padres y los hermanos de acuerdo con las reglas que para cada caso se establecen. Sin

embargo, la norma no especifica absolutamente nada con relación a los hijos o padres de crianza. Lo anterior se presenta, debido a que dicho escenario es una situación que se origina a raíz de diversos factores sociales que afectan al menor, lo que conlleva a que este sea criado por familiares, amigos u hogares sustitutos sin que se lleve a cabo un proceso legal de adopción.

No obstante, en la actualidad el concepto de familia dista mucho de lo que era aceptado en años anteriores, ya que actualmente “pueden observarse las familias extensas o nucleares, y otra variada gama de factores sociales y nuevas formas de comportamiento, esparcimiento e ideologías que han modificado la manera como se estructura la familia” (Vela, 2015, p.17).

Por lo tanto, son diversas las formas de conformar una familia, además, que no necesariamente se requiere un vínculo natural o jurídico para que la misma exista. Por consiguiente, y gracias al desarrollo que de forma progresiva se ha venido dando a nivel social, es que el máximo órgano constitucional se ha visto en la necesidad de transformar la forma como se interpreta la ley, con el fin de extender los derechos que se encontraban limitados y restringidos a nivel normativo. Lo anterior, en virtud de los principios legales que regulan el Estado Social de Derecho.

Es por ello, que la pensión de sobrevivientes concedida a los hijos de crianza es una realidad que no puede desconocerse, ya que la protección de los derechos fundamentales es un asunto que se encamina de forma progresiva atendiendo las nuevas necesidades que se originan al interior de la sociedad.

Por consiguiente, se presenta para esta investigación un interrogante que se refiere acerca de ¿cuáles son los requisitos que ha establecido la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia para que proceda el otorgamiento y reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al interior de las familias de crianza?

De igual manera, como objetivo general se pretende analizar el concepto actual de familia con el fin de identificar los presupuestos requeridos para que la pensión de

sobrevivientes pueda ser concedida a los hijos de crianza. Lo anterior, de acuerdo con las nuevas formas de conformación familiar que han sido protegidas por la Corte Constitucional.

Por lo tanto, para desarrollar a plenitud el problema jurídico planteado y el objetivo general propuesto, se realizará un estudio doctrinal y jurisprudencial que permita llegar a las conclusiones necesarias para comprender que la pensión de sobrevivientes es un derecho que les asiste a los hijos de crianza en igualdad de condiciones.

1. El concepto de familia de acuerdo con la doctrina y con la Corte Constitucional colombiana.

Como es bien sabido y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 42 de la Constitución política de Colombia, a la familia se le considera el núcleo fundamental de la sociedad. Esto es así, porque de ella se desprenden una serie de valores y derechos del ciudadano, por lo tanto, se convierte en una institución que merece y a la que se le debe brindar una protección especial por parte del Estado.

Sin embargo, la noción de familia ha cambiado mucho a lo largo de los años, lo anterior se afirma, a raíz de la evolución que ha tenido la sociedad hacia los nuevos enfoques y perspectivas de como se ve a la familia en la actualidad, definiéndola desde puntos de vista económicos y sociológicos. Como bien expresan Arboleda y Camacho (2015), “el concepto de familia, es un concepto dinámico y cambiante, a pesar de la definición que trae el artículo 42 de nuestra norma suprema, el cual recoge el concepto de familia de manera implícita y limitad[a]” (p. 2).

Con la Constitución Política de 1991 se estableció el reconocimiento y la protección por parte del Estado del núcleo familiar como elemento esencial de la sociedad, pero con el paso del tiempo la sociedad avanza y su desarrollo también, incluso sus instituciones jurídicas cambian; es el caso de la familia. (Rodríguez, J. O y Rodríguez, L. O. 2014, p. 11)

Ahora bien, el artículo 42 de la norma superior colombiana especifica que la familia se puede “constituir por vínculos naturales y jurídicos o por la decisión libre de un hombre y una mujer para contraer matrimonio”, la anterior afirmación implica una restricción del concepto de familia destinado únicamente al que se conforma a en virtud del matrimonio sea civil o católico, los cuales se encuentran regulados por una serie de normas que le otorgan derechos y protección inmediata. Estos sistemas matrimoniales son explicados por Polo (2016) de la siguiente manera:

[...] puede ahora decirse que por sistema matrimonial hemos de entender aquel sector de normas del ordenamiento estatal que regula la coexistencia en dicho ordenamiento de los distintos tipos de matrimonio o, en su caso, de las distintas formas de celebración del connubio, básicamente la forma civil en sus distintas modalidades, de un lado, y las formas religiosas, de otro. (p.153)

Sin embargo, con la ley 54 de 1990 también se le concedieron derechos que eran exclusivos del matrimonio civil o católico a las uniones maritales de hecho que se conformen entre un hombre y una mujer, como por ejemplo, los derechos patrimoniales que se materializan a partir del cumplimiento del requisito de convivencia mínima de dos años y que se denomina como sociedad patrimonial de hecho, institución que equivale a la sociedad conyugal inherente a los matrimonios la cual nace a la vida jurídica de forma inmediata a la celebración y registro de los mismos.

Con relación a la protección que tiene la familia conformada a través de la unión marital de hecho, la Corte Constitucional en sentencia T- 522/11, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza expresó lo siguiente:

[...] la protección integral a la familia, se extiende tanto a las conformadas por un vínculo matrimonial surgido de un acto jurídico solemne, como a las constituidas por la voluntad de quienes han convenido unir sus vidas mediante vínculos naturales desprovistos de formalidad.

De acuerdo con lo anterior, podría decirse entonces que un concepto de familia puede ser el propuesto por Corral (1995) citado por Muñoz (2014) el cual lo define como:

[...] aquella comunidad que, iniciada o basada en la unión permanente de un hombre y una mujer destinada a la realización de los actos humanos propios de la generación, está integrada por personas que conviven bajo la autoridad directiva o las atribuciones de poder concedidas a una o más de ellas, adjuntan sus esfuerzos para lograr el sustento propio y desarrollo económico del grupo y se hallan unidas por un afecto natural derivado de la relación de pareja o del parentesco de sangre, el que las induce a ayudarse y auxiliarse mutuamente. (p.84)

De igual forma, otros autores citados también por Muñoz (2014) dan su definición del concepto de familia como por ejemplo Rossel (1994), quien indica que la familia “es un conjunto de individuos unidos por vínculo de matrimonio o parentesco” (p. 85) o Planiol (1981) que manifiesta que la familia es un conjunto de “personas que se encuentran unidas por el matrimonio, la filiación o la adopción, vale decir, el conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, bajo la misma dirección y con los recursos proporcionados por el jefe de la casa” (p. 87), En el mismo sentido, Suárez (1998) citado por Silva (2014) indica que la familia es “el conjunto de individuos unidos entre sí, por vínculos jurídicos o naturales, como lo son el parentesco y el matrimonio” (p. 3).

No obstante, lo anteriormente mencionado contiene limitaciones en cuanto a lo aceptado actualmente como forma de conformar una familia, puesto que se entiende que la misma solo puede ser válida en virtud de la unión o el matrimonio entre un hombre y una mujer, circunstancia que claramente va en contravía de los derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, entre otras prerrogativas más de categoría superior derivadas de la protección que se ha brindado como consecuencia de la diversidad sexual presente en la sociedad y a los problemas que la misma afronta. Ya “que el matrimonio no es necesario para que podamos hablar de familia, y, de hecho, las uniones no matrimoniales o consensuales dan lugar a la formación de nuevas familias” (Palacios y Rodrigo, 2014, p. 26), sea entre parejas heteroafectivas y/o homoafectivas.

Debido a lo anterior, es muy común no solo encontrar parejas del mismo sexo conformando una unidad familiar, sino que también, es común hallar familias monoparentales en donde el jefe del hogar puede ser una mujer cabeza de familia quien se encuentra a cargo de sus pequeños hijos, padres solteros o simplemente familias de una sola persona.

Como bien mencionaron Montoya y Montoya (2014) citados por Arboleda y Camacho (2015), dentro de las diversas formas de conformación familiar se encuentran las siguientes:

LA FAMILIA NUCLEAR: es la que está compuesta por padres e hijos o por la pareja de hombre y mujer, sin hijos

LA FAMILIA EXTENSA O PARENTAL. Es la que está compuesta por un grupo de personas unidas por las diversas clases de parentescos establecidas por el legislador

LA FAMILIA MATRIMONIAL. Es aquella cuyo origen se encuentra en el matrimonio de la pareja que la conforma o que le da nacimiento.

LA FAMILIA EXTRAMATRIMONIAL O NATURAL. Aquella cuyo origen se encuentra en ‘...la voluntad responsable de conformarla’ de un hombre de una mujer o de dos hombres o de dos mujeres. También se le llama marital, como en el caso de la legislación colombiana, ley 54 de 1990.

LA FAMILIA MONOPARENTAL. Es aquella integrada por uno de los padres y sus hijos. Aquí se distinguen dos tipos: La matricéntrica: madre e hijos. La patricéntrica, conformada por el padre y los hijos.

LA FAMILIA BIPARENTAL. La familia integrada por ambos padres y los hijos.

FAMILIA ENSAMBLADA. Llamada también reconstituida, transformada o biparental compuesta; equivale a la que en el sistema anglo sajón se denomina

“stepfamily” y es la familia compuesta por un hombre y una mujer, hijos comunes de ellos e hijos no comunes de ellos.

FAMILIA DIVERSA. Compuesta por la unión de dos hombres o de dos mujeres. Esta familia puede ser matrimonial o extramatrimonial, dependiendo de las legislaciones. (p. 5)

A su vez, Medina (2014) refiere que el hombre no solo se relaciona con parejas opuestas a su sexo, sino que también tiende a unirse con miembros de su mismo género:

Que la unión libre sea la unión personal, individual y exclusiva entre hombre y mujer no impedidos para contraer matrimonio y con vocación de permanencia es decirlo todo y no decir nada, porque el ser humano tiene por instinto la tendencia a unirse con miembros del otro sexo, bajo una gama demasiado amplia de formas. (p. 343)

Es por ello, que la Corte Constitucional debió interceder a través de sus decisiones para ampliar la manera como debe interpretarse el artículo 42 de la Constitución Política, ya que dicho precepto se encontraba siendo interpretado de acuerdo con el ideal de familia patriarcal que “se basaba en la pareja casada y en los conceptos de padre e hijo, y le concedía al marido o padre privilegios y poderes sobre la propiedad y la sexualidad de su esposa e hijos” (Jaramillo, 2013, p. 75).

Lo anterior es debido a que como ya se ha mencionado, la noción de familia ha evolucionado hacia nuevos enfoques, lo que obliga a ampliar y entender la definición del concepto desde diversas perspectivas aunque se conserven muchos de sus fundamentos originales. Como bien expresó Vela (2015):

[...] la familia siempre será una entidad en constante cambio en razón a las variaciones en las dinámicas sociales que la atraviesan, pero que independientemente de estas, generalmente ha conservado las funciones que en todas las sociedades le han sido asignadas como institución primaria para la trasmisión de valores y tradiciones (socialización primaria), producción, reproducción, protección de la vida, control

social y que con los cambios contextuales se transforma la manera en que se desempeñan. (p. 6)

Por su lado, Crabay (2013) con respecto al concepto de familia escribió lo siguiente:

La familia puede ser vista conceptualmente desde diferentes definiciones. Tradicionalmente, la familia nuclear fue considerada por mucho tiempo el modelo instituido de familia. Con el paso del tiempo y las transformaciones socioculturales, nos encontramos hoy con familias difíciles de definir; desde ese paradigma tradicional y, paradójicamente, se torna muy difícil encontrar un modelo familiar acorde con las funciones, roles y finalidades. (p. 47)

Es por ello, que la Corte Constitucional comprendió que limitar la conformación familiar solo a parejas heterosexuales o las conformadas a través del matrimonio y/o uniones maritales va en contravía de derechos fundamentales y de los derechos humanos que se encuentran intrínsecamente relacionados, lo que implica que las entidades estatales adquieren responsabilidades “para garantizar estos derechos a los ciudadanos, por medio de políticas de implementación que se encuentran como mandatos desde el texto constitucional” (Llano y Velasco, 2016, p. 39). Lo anterior, debido a que el concepto de familia se ha ampliado mucho de acuerdo con el desarrollo social devenido en los últimos años.

La idea de familia tradicional ha ido dejando paso a un nuevo concepto de familia muy heterogéneo. La sociedad va evolucionando y con ella una de sus instituciones más importantes: la familia, cuyo perfil actual es muy heterogéneo ya que existe un:

- Incremento de las familias monoparentales.
- Una progresiva pérdida de la autoridad del padre.
- Aumento de la cohabitación y de los hijos habidos fuera del matrimonio.
- Reconocimiento social de las parejas homosexuales.
- Etc. (Gervilla, 2010, p. 15)

En el mismo sentido, Moliner (2013) con referencia a la extensión del concepto de familia expresó lo siguiente:

La actual diversificación de los modelos de convivencia afectiva ha generado, por un lado, la extensión del concepto a realidades como la familia no matrimonial (uniones de hecho), la familia monoparental (un solo progenitor e hijos) o, incluso, la denominada “familia homosexual” (convivientes del mismo sexo e hijos biológicos de uno de ellos o adoptados por uno o conjuntamente por ambos). (p. 60)

Es así, que la Corte Constitucional ha determinado que el artículo 42 de la Constitución Política debe ser comprendido de forma armoniosa con el principio de dignidad humana en la que se funda el Estado Social de Derecho, además, en armonía con el derecho a la libertad individual e igualdad, puesto que actualmente, en la sociedad existe un pluralismo que debe ser respetado y protegido. Por lo tanto:

[...] el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio de pluralismo, porque en una sociedad plural, no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonio (Sentencia C-577/2011, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza)

En la misma sentencia citada con anterioridad, la Corte enfatiza que el concepto de familia depende de las condiciones sociales, culturales, y del entorno de los individuos que la conforman, además de otras situaciones, así mismo, coloca un ejemplo clarificante acerca de cómo un individuo puede conformar distintos tipos de familia que deben ser respetados.

Siendo el ejemplo de la Corte el caso de una mujer que contrae matrimonio y procrean hijos, aquí ella transcurre por el modelo de familia “nuclear”, sin embargo, de forma posterior se divorcia y queda a cargo de sus hijos en donde transitaría por el modelo de familia “monoparental”, luego vuelve a casarse por lo que se conformaría una familia “ensamblada” finalmente, queda viuda transitando nuevamente por la monoparentalidad. Por consiguiente:

El “carácter maleable de la familia” se corresponde con un Estado multicultural y pluriétnico que justifica el derecho de las personas a establecer una familia “de acuerdo a sus propias opciones de vida, siempre y cuando respeten los derechos fundamentales”, pues, en razón de la variedad, “la familia puede tomar diversas formas según los grupos culturalmente diferenciados”, por lo que “no es constitucionalmente admisible el reproche y mucho menos el rechazo de las opciones que libremente configuren las personas para establecer una familia.

Por lo tanto, el concepto de familia a hoy se entiende como una noción dinámica y cambiante que depende de muchos factores tanto biológicos y naturales, como sociológicos, por lo tanto, no puede entenderse como familia única y exclusivamente a la que se conforma por los hijos y por un padre y una madre que se unieron bajo la institución del matrimonio. Puesto que dicha circunstancia, atentaría contra los derechos a la igualdad, dignidad y libertad de los demás individuos que independientemente de sus condiciones sociales y de su sexualidad pertenecen al género humano y que por su propia naturaleza buscan la compañía de otras personas con las que crean lazos de afecto y se proporcionan ayuda mutua, lo que se traduce en la conformación de una familia.

Es así, como se conforman las familias compuestas por parejas de mismo sexo, las familias ensambladas y las familias de crianza que en un país en donde se presentan múltiples escenarios de violencia es muy común que los niños sean criados por personas que no son sus padres naturales, entonces, sería un despropósito inconstitucional el aceptar solamente como familia el concepto tradicional que se tiene de la misma y que se conforma por padres e hijos bajo la figura del matrimonio.

1.1. El hijo y la familia de crianza.

El concepto del hijo de crianza es una realidad social que se deriva de múltiples escenarios mediante los cuales, se crea una situación especial en donde un menor no se cría bajo el amparo de sus padres biológicos, sino, que crece bajo el cuidado y protección de otras personas en donde se fomenta y estimula un ambiente propicio para que florezcan lazos de afecto tan fuertes como los de un padre hacía un hijo y viceversa.

Lo anterior se presenta, sin que se adelante ningún proceso de adopción puesto que cuando se adopta a un menor, el mismo adquiere los derechos de cualquier hijo de forma inmediata, mientras que en las familias de crianza muchos de sus derechos deben ser reconocidos mediante algún tipo de sentencia judicial, esto, a pesar de que la jurisprudencia emitida por las altas cortes ha ayudado bastante para que sea mucho más raudo y expedito el reconocimiento de algunos derechos como por ejemplo, el derecho a la pensión de sobrevivientes que es objeto de este estudio.

Lo anterior se debe a que “es la misma ley la que en forma taxativa enumera las modalidades de los vínculos familiares, sin que aparezca por ninguna parte la crianza como generadora de derechos” (García, 2013, p. 1). Por otro lado, el Consejo de Estado en sentencia del 11 de julio de 2013, radicado 31252 expresó sobre el hijo de crianza lo siguiente;

[...] encuentra oportuno la Sala esbozar unos leves lineamientos sobre lo que con inusitada frecuencia en nuestra realidad social se denomina “hijo de crianza”. Condición que puede tener origen no del todo en el marco de la solemnidad de la adopción como institución jurídica, sino en la facticidad de las relaciones sociales propias de nuestra cultura.

Lo citado con anterioridad, demuestra lo que ya se ha mencionado con relación a que el hijo de crianza es una figura que no nace de la adopción, sino como consecuencia de algún hecho que hace que el menor no sea criado por sus padres biológicos, sino, por otras personas con las que finalmente crea lazos de afecto iguales a los que se dan entre padres e hijos.

Por otro parte, la Corte Suprema de Justicia en sentencia N° 40599 del 17 de abril de 2013 citada por Arbeláez (2014) da una definición sobre los padres de crianza en el entendido de que son personas que asumen el cuidado de un menor cumpliendo con las obligaciones que son propias de los padres biológicos del mismo:

[...] aquellos que por diferentes circunstancias de la vida, asumen gratuitamente el cuidado de un menor, cumpliendo las obligaciones que le son propias a los padres naturales o adoptivos, pero sin que los una al entenado algún vínculo familiar, legal o jurídico. (p. 11)

Por su lado, la sentencia C- 577 de 2011 se refiere a la familia de crianza en los siguientes términos:

[...] surge cuando “un menor ha sido separado de su familia biológica y ha sido cuidado por una familia distinta durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que se hayan desarrollado vínculos afectivos entre el menor y los integrantes de dicha familia” que, por razones poderosas, puede ser preferida a la biológica, “no porque esta familia necesariamente sea inepta para fomentar el desarrollo del menor, sino porque el interés superior del niño y el carácter prevaleciente de sus derechos hace que no se puedan perturbar los sólidos y estables vínculos psicológicos y afectivos que ha desarrollado en el seno de su familia de crianza”.

En el mismo sentido, la sentencia T-049/99 especifica que:

El concepto de familia no incluye tan sólo la comunidad natural compuesta por padres, hermanos y parientes cercanos, sino que se amplía, incorporando aun a personas no vinculadas por los lazos de la consanguinidad, cuando faltan todos o algunos de aquéllos integrantes, o cuando, por diversos problemas -entre otros los relativos a la destrucción interna del hogar por conflictos entre los padres, y obviamente los económicos-, resulta necesario sustituir al grupo familiar de origen por uno que cumpla con eficiencia, y hasta donde se pueda con la misma o similar intensidad, el cometido de brindar al niño un ámbito acogedor y comprensivo dentro del cual pueda desenvolverse en las distintas fases de su desarrollo físico, moral, intelectual y síquico.

De igual manera, en la sentencia T 316 de 2017, la Corte se manifestó sobre las familias de crianza en las siguientes palabras:

En conclusión, la institución familiar se encuentra protegida por la Constitución como fundamento de la sociedad, y responde a una construcción dinámica y plural cuyo resguardo no distingue entre las diversas formas de origen, como la biológica, jurídica o de hecho

Una protección integral a la familia implica garantizar la igualdad frente a los derechos y obligaciones que tienen sus miembros

La Sala estima pertinente reiterar que, en Colombia, como consecuencia de la evolución de las relaciones humanas y de la aplicación del principio de solidaridad, existen diferentes tipos de familia. Entonces, el derecho debe ajustarse a las realidades sociales, de manera tal que reconozca y brinde la protección necesaria a las relaciones familiares, donde las personas no están unidas única y exclusivamente por vínculos jurídicos o biológicos, sino en virtud de los lazos de afecto, solidaridad, respeto, protección y asistencia.

Finalmente, la sentencia T-942/14 expresa que:

Cuando un niño ha desarrollado vínculos afectivos con sus cuidadores de hecho, cuya ruptura o perturbación afectaría su interés superior, es contrario a sus derechos fundamentales separarlo de su familia de crianza, incluso si se hace con miras a restituirlo a su familia biológica”

Por consiguiente, se entiende que los hijos y la familia de crianza son una de las modalidades de conformación familiar que en la actualidad se presenta y que nace como consecuencia de diversas situaciones fácticas que originan que la crianza de un menor se presente bajo el amparo de personas distintas a sus padres biológicos, y que a raíz de ello, se originan lazos afectivos que no pueden ser rotos ni perturbados debido a que dicha circunstancia iría en contra del interés superior del menor.

De lo anterior se puede colegir, que si la familia de crianza perdura en el tiempo entonces de ella emergen una serie de derechos que deben garantizarse en virtud de la protección especial que se le debe otorgar a dicha institución, prerrogativas como por ejemplo la que es objeto de esta investigación que pretende salvaguardar a quien tenga derecho a recibirla frente a las contingencias que puedan presentarse por el fallecimiento del padre de crianza o del hijo de crianza.

2. La pensión de sobrevivientes.

La pensión de sobrevivientes es una prestación económica contenida en el régimen general de pensiones que ha sido estipulado en la ley 100 de 1993, la cual se otorga a los miembros del grupo familiar del afiliado o pensionado que fallece y que tiene como finalidad “salvaguardar al núcleo familiar del fallecido frente a contingencias ocasionadas por su muerte” (Cañón, Fino, Lozada y Pradilla, 2004, p. 8).

En el mismo sentido, Gómez y Montoya (2011) expresaron que “[la] pensión de sobrevivientes es la pensión que deja el causante a sus beneficiarios cuando fallece, como una extensión protectora de la seguridad social. Por esa razón podemos decir que la pensión de sobrevivientes cumple una función social fundamental” (p. 8).

De igual manera, Salazar (2015) se refirió acerca de la pensión de sobrevivientes con las siguientes palabras:

La pensión de sobreviviente, es la protección social que el sistema de seguridad social brinda al grupo familiar del afiliado o pensionado para que cuando ocurra el riesgo de la muerte de éste, dicha pérdida no haga más difícil la situación de la familia y no afecte los recursos para su sostenimiento proporcionados con el trabajo o la pensión del fallecido. (p.23)

Por su parte, la Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia también ha estudiado y definido a esta prestación, tal es el caso de la sentencia C-066/16 a través de la cual la corporación manifiesta que la pensión de sobrevivientes “está concebida para amparar o proteger a quienes mantenían subordinación respecto del causante para satisfacer sus

necesidades básicas de subsistencia” o el caso de la sentencia C-1035/08 en donde se manifiesta que *el propósito perseguido por la Ley al establecer la pensión de sobrevivientes ha sido el de ofrecer un marco de protección a los familiares del afiliado o del pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de su muerte”*.

Por lo tanto, la pensión de sobrevivientes tiene una finalidad protectora frente a las eventualidades que se puedan suscitar debido al fallecimiento del pensionado o afiliado, lo que la hace ser un derecho que se encuentra intrínsecamente relacionado con otras prerrogativas de categoría superior como lo pueden ser el mínimo vital, el derecho a una vida digna y el derecho a la seguridad social. Es por ello, que es de trascendental importancia su reconocimiento con el fin de salvaguardar de manera oportuna los derechos del grupo familiar del fallecido que tienen derecho a recibirla.

2.1. Beneficiarios y requisitos para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes en el Régimen General de Pensiones de la ley 100.

De acuerdo con el artículo 47 de la ley 100 y el artículo 13 de la ley 797 de 2003, los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes son el cónyuge, compañera o compañero permanente de forma vitalicia, cuando los mismos posean una edad de 30 años o superior y siempre y cuando, acrediten que convivieron con el afiliado o pensionado fallecido por un tiempo no inferior a 5 años.

De igual manera, tienen derecho a recibirla el cónyuge, compañera o compañero permanente de forma temporal cuando posean una edad inferior a los 30 años y no hayan procreado hijos con el fallecido, en este caso recibirán la prestación por un periodo de 20 años, pero en caso de que existan hijos de por medio, la prestación se otorgará de forma vitalicia.

A su vez, los hijos del fallecido que sean menores de 18 años y los que sean mayores de 18 años y hasta los 25 que se encuentren incapacitados para trabajar debido a sus estudios, tendrán derecho a recibir la pensión de sobrevivientes. Al igual, que los hijos

discapacitados si dependían económicamente del causante, ellos podrán recibir la prestación mientras subsista la condición de discapacidad.

Por otro lado, estipula la norma que cuando no exista cónyuge, compañera o compañero permanente ni hijos del causante, quienes tienen derecho a recibir la prestación serán los padres de este siempre y cuando dependan económicamente del fallecido, y en caso de que tampoco existieran padres, serían los hermanos que se encuentren en condición de discapacidad y que dependan económicamente del afiliado o pensionado que murió.

Con respecto a los requisitos para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes se debe decir, que no solo basta con acreditar el parentesco o filiación y los años de convivencia, sino que además, es requisito que el afiliado o pensionado que falleció haya cotizado un mínimo de 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores a su muerte (artículo 46 de la ley 100 y 12 de la ley 797 de 2003). En cuanto al monto que se otorga para los beneficiarios de la prestación, establece la norma que será del 100% de la mesada pensional que disfrutaba el pensionado y de máximo el 75% del ingreso base de liquidación cuando quien fallece es el afiliado (o sea, un individuo que muere antes de cumplir los requisitos para su pensión).

Por último, vale la pena aclarar que a lo largo de los años y gracias a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, el derecho a la pensión de sobrevivientes se fue extendiendo hacia nuevas modalidades de conformación familiar, entre ellas por ejemplo, las conformadas por parejas homoafectivas. Con respecto a esto último, Rodríguez, R. (2014) expuso que:

El señalamiento de los beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes en la legislación colombiana ha tenido una lenta pero constante evolución, ya que las primeras normas desconocían cualquier derecho pensional respecto de uniones no matrimoniales. Poco a poco se fue incluyendo a la compañera y después al compañero permanente, y por vía jurisprudencial se ha presentado el equiparamiento de las uniones maritales de hecho con las uniones matrimoniales, y posteriormente la extensión de la Pensión de Sobrevivientes a la pareja del mismo sexo. (p. 250)

3. La pensión de sobrevivientes en las familias de crianza.

Como ya se ha mencionado, son diversas las formas actuales en las que se conforma una familia, lo anterior en virtud de múltiples circunstancias de orden sociológico como lo puede ser la violencia, la destrucción del hogar nuclear, el abandono infantil y un sin número de situaciones que originan la crianza de un menor bajo la custodia de personas que no son sus padres naturales, pero que en razón a ello, se generan lazos afectivos como los que naturalmente se dan entre un padre y un hijo. Como bien explicó la Corte Constitucional:

La Sala observa que la protección especial reconocida a la institución de la familia por la Carta y el derecho internacional, no se limita a aquella del modelo clásico compuesta por vínculos de consanguinidad, sino que se extiende a otras estructuras, conformadas por lazos jurídicos o de hecho, que surgen a partir de la convivencia y que se basan en el afecto, el respeto, la protección, la ayuda mutua, la comprensión y la solidaridad. (Sentencia T-316 de 2017)

De lo anterior se colige, que si dicha relación y conformación familiar perdura en el tiempo naturalmente se originan prerrogativas que deben ser garantizadas y protegidas en virtud de los derechos a la igualdad, la dignidad, el mínimo vital, la seguridad social, el derecho a la familia y la protección especial de la misma, entre otra más. Es por ello, que la pensión de sobrevivientes en las familias de crianza se erige como un derecho y una salvaguarda a la que pueden acceder tanto los hijos que dependan económicamente de sus padres de crianza, como los padres que dependan económicamente de sus hijos de crianza. Tal y como lo expresó Álvarez (2013):

En efecto, es conocido que desde un enfoque sociológico el grupo familiar puede estar integrado por hijos no carnales, como adoptivos, hijastros y de crianza, es decir, aquellos que son acogidos y cumplen en la realidad y en todo sentido un rol filial en la familia, pese a no tener lazos directos de consanguinidad con los padres o con uno

de ellos, de modo que si llegasen éstos a faltar sufrirían los efectos del desamparo dada su dependencia emocional y económica. No tendría, entonces, sentido que la ley de Seguridad Social excluyera de su ámbito de protección por razones estrictamente formales a sujetos que en modo ostensible la requieren y la merecen, máxime si se trata de menores e inválidos, a quienes el Estado quiere esmerarse en resguardar, conforme se deriva de los artículos 13, inciso 3, 44, 45 y 47 de la Constitución. (p. 86)

Por lo tanto, se indicará a continuación el derecho que tienen los hijos y los padres de crianza a recibir la pensión de sobrevivientes de acuerdo con los recientes pronunciamientos que ha emitido la Corte Constitucional.

3.1. La pensión de sobrevivientes para los hijos de crianza.

La corte constitucional durante los últimos 3 años aproximadamente ha analizado los derechos que se derivan de la familia de crianza en cuanto a la seguridad social como un derecho primordial que debe ser garantizado, es así, que en la sentencia T-074/16 la corporación manifiesta que debe existir una protección especial al núcleo familiar el cual surge a raíz de diferentes vínculos que pueden ser naturales, jurídicos y de hecho o crianza. Lo anterior en virtud de la ampliación de la definición del concepto de familia el cual es dinámico y debe entenderse en un sentido amplio y no restrictivo.

De esta forma, dice la Corte que la protección constitucional debe proyectarse hacia aquellas familias conformadas por padres, madres e hijos de crianza, puesto que las mismas surgen en virtud de las relaciones de “afecto, respeto, solidaridad, comprensión y protección”. En consecuencia, no es posible realizar distinciones entre los diversos tipos de familia y mucho menos, entre los diferentes tipos de hijo, ya que dicha circunstancia generaría una discriminación la cual está completamente proscrita. En palabras de la Corte:

[...] resulta diáfano que en Colombia, como consecuencia de la evolución de las relaciones humanas, y de la aplicación del principio de solidaridad, existen diferentes tipos de familia. Entonces, el derecho debe ajustarse a las realidades sociales, de

manera tal que reconozca y brinde la protección necesaria a las relaciones familiares, donde las personas no están unidas única y exclusivamente por vínculos jurídicos o naturales, sino en virtud de los lazos de afecto, solidaridad, respeto, protección y asistencia.

Por lo tanto, es claro que para la Corte Constitucional el artículo 42 de la constitución política debe entenderse de forma amplia y de igual manera, el artículo 47 de la ley 100 que estipula quienes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, el cual debe interpretarse con fundamento en el principio de solidaridad y a su vez, en un sentido amplio, entendiendo que:

[...] la expresión “*hijos*”, contenida en el literal b del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 debe entenderse en sentido amplio; es decir, incluye como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los hijos naturales, adoptivos, de simple crianza y de crianza, por asunción solidaria de la paternidad.

Debido a esto, es que en dicha sentencia la Corte protegió los derechos a la igualdad, dignidad, seguridad social y vida digna de un menor de edad que además se encontraba en condición de discapacidad, y por lo tanto, le otorgó el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes por ser hijo de crianza de su abuelo fallecido quien se encontraba a cargo de su manutención y de sus gastos médicos.

Por otro lado, en la sentencia T-525/16 se determinan los presupuestos para que la pensión de sobrevivientes pueda ser otorgada a los hijos de crianza, según la corporación dichos presupuestos que debe cumplirse son:

La solidaridad: la cual se determina en la evaluación que se hace de cada caso en particular con respecto a los motivos que llevaron a los padres de crianza a hacerse cargo del hijo, brindando de esa manera el apoyo emocional y material que el menor requiere para su subsistencia.

Remplazo de las figuras paternas: equivale a la sustitución de los vínculos consanguíneos y civiles por relaciones de hecho o de facto.

La dependencia económica: esta se genera entre los padres e hijos, en el entendido que estos últimos no pueden subsistir por sus propios medios puesto que para ello, se hace necesaria la intervención de sus padres de crianza en remplazo de sus padres biológicos o adoptivos quienes le garantizan el adecuado nivel de desarrollo y una vida en condiciones dignas al menor.

Vínculo de afecto, respeto, comprensión y protección: este se comprueba con la afectación moral y emocional que pueden sufrir los miembros de la familia de crianza cuando son separados, de igual manera, se fundamenta en las buenas relaciones basadas en el amor y la solidaridad que se desprendan de la interacción familiar.

Reconocimiento de la relación entre padres e hijos: este presupuesto debe existir de forma implícita por parte de los miembros de la familia y debe observarse a simple vista por sujetos que no pertenezcan a ese núcleo familiar, es decir, frente a los ojos de los demás debe apreciarse que los miembros de esa familia conviven naturalmente como padres e hijos.

Existencia de un término razonable de relación afectiva entre padres e hijos: se evalúa en cada caso concreto puesto que no se determina un tiempo establecido como requisito para que pueda considerarse a una familia como de crianza, por lo tanto, quiere decir que el tiempo de convivencia debe ser el necesario para que se hayan originado vínculos afectivos y a su vez, pueda considerarse que se ha creado una comunidad de vida basada en el amor, el respeto y la solidaridad.

Afectación del principio de igualdad: implica que deben existir idénticas consecuencias legales tanto para las familias de crianza como para las biológicas y jurídicas en cuanto a las obligaciones y a los derechos que se deriven de las mismas. Por lo tanto, si los padres de crianza cumplen con las obligaciones que le corresponden a un padre biológico o adoptivo, es claro entonces que al interior de esa familia deberán garantizarse los mismos derechos que tienen las demás formas de conformación familiar, por consiguiente, tendrán iguales derechos y acceso a la mismas prestaciones que son protegidas por la constitución política.

Debido a los requisitos mencionados con anterioridad, la Corte Constitucional en dicha sentencia resolvió ordenar a Colpensiones que expidiera la resolución mediante la cual le otorga el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a dos menores de edad que fueron criados por su abuelo quien asumió el rol de padre de crianza, lo anterior, en virtud de que en el caso en concreto se cumplieron cada uno de los requisitos estipulados en este fallo, los cuales sirven como precedente y referente para que quien considere que tiene derecho a recibir la pensión de sobrevivientes al interior de una familia de crianza verifique si cumple con cada uno de ellos.

Es así, que la pensión de sobrevivientes para los hijos de crianza se fundamenta en un catálogo de derechos que tiene protección constitucional, tales como lo son la igualdad, la vida digna, el mínimo vital, el derecho a una familia y a la protección especial de esta. Por lo tanto, la pensión de sobrevivientes debe otorgarse al interior de las familias de crianza en igualdad de condiciones, pero solo cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos que han sido estipulados por la Corte Constitucional y que han sido enunciados con anterioridad, esto garantiza que no se defraude al sistema general de pensiones puesto que cualquier individuo aprovechando las nuevas consideraciones que ha realizado la Corte sobre esta materia pretenda verse beneficiado de una pensión aduciendo simplemente que fue criado por un familiar o por otras personas que fungieron como sus padres.

Igualmente, la pensión de sobrevivientes al reconocerse en favor de los hijos de crianza tiene como fin proteger el interés superior del menor, quien se erige como un sujeto de especial protección constitucional debido a su situación de vulnerabilidad que la Corte explica de la siguiente forma:

Ahora bien, la calidad de sujetos de especial protección constitucional de los niños, niñas y adolescentes tiene su fundamento en la situación de vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran, pues su desarrollo físico, mental y emocional está en proceso de alcanzar la madurez requerida para la toma de decisiones y participación autónoma dentro de la sociedad. (Sentencia T-316 de 2017)

Por lo tanto, a través de este reconocimiento se garantiza la protección en igualdad de condiciones de los derechos fundamentales que tienen los menores al mínimo vital, vida digna y seguridad social y se garantiza así mismo, la protección integral de la familia independientemente de la forma como la misma se encuentra compuesta, sea por vínculos jurídicos, biológicos o por lazos de afecto, solidaridad, comprensión y ayuda mutua.

3.2. La pensión de sobrevivientes para los padres de crianza.

Por último, puede deducirse que si la Corte Constitucional garantiza un trato igualitario para el otorgamiento de derechos y prestaciones sociales al interior de las familias de crianza, entonces, es evidente que los padres de crianza también tienen derecho a ser beneficiados de la pensión de sobreviviente si quien fallece primero es el hijo de crianza.

Por lo tanto, si los padres de crianza se encuentran en unas condiciones desfavorables que los hacen vulnerables y además, dependían económicamente de su hijo de crianza quien ha fallecido, y si este cumplió con los requisitos de cotización mínima de 50 semanas y no dejó cónyuge, compañera o compañero permanente ni hijos sobrevivientes, pues entonces, sus padres de crianza según las reglas de la ley 100 aplicadas de forma análoga al caso en particular, podrán verse beneficiados de la pensión de sobrevivientes con el fin de que se les garanticen sus derechos a la seguridad social, igualdad, vida digna y mínimo vital.

Sobre lo anterior, debe decirse que no existe abundante jurisprudencia al respecto, sin embargo, es posible hallar un pronunciamiento emitido por el Consejo de Estado mediante sentencia del 25 de septiembre de 2008, a través de la cual se reconoció la pensión de sobrevivientes a un padre de crianza quien era el abuelo del fallecido, un soldado regular del Ejército Nacional de Colombia que fue criado por su abuelo materno luego de la muerte de sus padres naturales.

Además, el beneficiado de esta decisión al momento de esta sentencia contaba con una edad de 87 años, siendo una persona de especial protección constitucional debido a su avanzada edad que lo hacía vulnerable, máxime, cuando dependía económicamente de su

nieto. Por lo tanto, el Consejo de Estado decidió proteger los derechos al mínimo vital, seguridad social, igualdad y vida digna del actor basándose en la siguiente situación:

De esta manera, si el trato, el afecto y la asistencia mutua que se presentaron el seno del círculo integrado por el peticionario y el soldado presionar fallecido eran similares a las que se predicen de cualquier familia formalmente constituida, la muerte de Carlos Julio mientras se encontraba vinculado al Ejército Nacional, debió generar para su “padre de crianza”, las mismas consecuencias jurídicas que la muerte de otro soldado para sus padres formalmente reconocidos; porque no hay duda de que el comportamiento mutuo de padres e hijo “de crianza revelaba una voluntad inequívoca de conformar una familia como la que consagra el artículo 42 de la Constitución política.

Es así, que de acuerdo con este pronunciamiento se entiende que el estudio para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en las familias de crianza se debe aplicar de igual manera cuando quien la reclama es un hijo o un padre de crianza, puesto que, lo que se busca proteger es a la familia como tal en unas condiciones de igualdad, independiente de su conformación jurídica, biológica o por vínculos de afecto y solidaridad.

Conclusiones.

Es claro entonces, que los distintos pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional responden al interrogante enunciado dentro de esta investigación, en el entendido de que efectivamente si se estipularon una serie de requisitos que deben acreditarse para que la pensión de sobrevivientes pueda ser otorgada al interior de las familias de crianza.

Dichos requisitos o presupuestos se encuentran encaminados en comprobar que en verdad existe una comunidad de vida que con el paso del tiempo creó unos lazos afectivos muy fuertes que no pueden ser perturbados y que se encuentran basados en el amor, el respeto y la solidaridad, lo cual garantiza en primer lugar el interés superior del menor y su derecho a tener una familia, a gozar de la protección y del afecto que un padre y una madre

pueden brindar, a tener condiciones de vida digna, a tener derecho a una educación, a estar protegido bajo el resguardo de un hogar en donde puede encontrar comodidades, seguridad y privacidad.

Es por ello, que la pensión de sobrevivientes se concede como consecuencia de la protección que en igualdad de condiciones otorga la Constitución Política a las diversas formas de conformación familiar, máxime cuando hay circunstancias de hecho que originan que la crianza de un menor se dé bajo el amparo, resguardo y protección de personas que asumen todas las responsabilidades que son propias de los padres biológicos y adoptivos, remplazando de esta manera dichas figuras a través del rol de padres que ellos asumen y el cual debe ser reconocido de forma implícita al interior del hogar, y que personas ajenas al núcleo familiar pueden observar con facilidad.

Por lo tanto, la negación del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para las familias de crianza es una circunstancia que afecta el principio de igualdad y genera discriminación, puesto que los padres de crianza al asumir este rol basados en el principio de solidaridad, garantizan la subsistencia y suplen las necesidades que el menor tenga, en consecuencia, las familias de crianza deberán ser beneficiarias de los mismos derechos y prestaciones que protege la Constitución Política, prerrogativas que deben ser reconocidas en igualdad de condiciones independientemente de si el núcleo familiar se encuentra compuesto por lazos de consanguinidad, jurídicos o por circunstancias de hecho o de facto.

Es así, que las entidades que se encargan de reconocer la pensión de sobrevivientes, llámense fondos privados o Colpensiones deberán analizar cada caso en concreto para determinar si el peticionario cumple o no con los requisitos estipulados por la Corte Constitucional para poder acceder a la prestación, de esta manera se evitaría cierto desgaste para la administración de justicia, ya que por lo regular se acude a la acción de tutela con el fin de que sea reconocido este derecho y debido a la prevalencia que tiene la acción de tutela, otros procesos de importante relevancia dejarían de ser atendidos por los jueces con el fin de resolver el asunto que se solicita a través de esta acción.

Por lo tanto, si ya existe un precedente jurisprudencial que es claro frente a los presupuestos que deben cumplirse, el mismo deberá ser tenido en cuenta tanto por quienes se consideren beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, como por las entidades encargadas de reconocer la prestación. Esto permitiría que poco a poco se vaya estrechando la brecha de desigualdad que aún se presenta para que a los hijos o padres de crianza se les reconozcan los derechos que le son inherentes por haber conformado un núcleo familiar que sin lugar a dudas se encuentra protegido por nuestra Norma Suprema.

Referencias.

Bibliográficas:

- Álvarez, L. A. (2013). *Derechos de los hijastros, los hijos de crianza, los padrastros y los padres de crianza en el sistema general de pensiones colombiano*. Trabajo de grado maestría, Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/39921/1/12435431.2013.pdf>
- Andrade, M. C., Marín, D & Medina, L. J. (2013). *Reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a parejas del mismo sexo*. Trabajo de grado, Universidad ICESI. Recuperado de https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79582/1/TG01114.pdf
- Arbeláez, C. (2014). *La familia de crianza en el ordenamiento jurídico colombiano. Estudio de la jurisprudencia de las altas cortes a partir de la Constitución de 1991 hasta el año 2013*. Trabajo de grado, Universidad EAFIT. Recuperado de https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7977/Carolina_ArbelaezGaviria_2015.pdf;sequence=2
- Arboleda, N. & Camacho, S. (2015). El concepto de familia en la Corte Constitucional entre 1995 y 2015. Trabajo de grado, Universidad CES. Recuperado de <http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/handle/10946/4055>
- Aristizábal, D. C. (2015). *De la pensión de sobrevivientes. Un estudio del derecho a las relaciones simultaneas*. Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia. Recuperado de <http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2567/1/De%20la%20pensi%C3%B3n%20de%20sobrevivientes%20%281%29.pdf>
- Cañón, M. X., Fino, C. X., Lozada, C. & Pradilla, A. C. (2004). *Investigación jurisprudencial en derecho a la seguridad social en pensión, periodo 2000-2003*.

- Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/TESIS45.pdf>
- Crabay, M. (2013). *Familias, subjetividades y educación*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Brujas.
- García, S. (2013). *Padres e hijos de crianza en Colombia, familias reales sin derechos formales en materia de sucesiones*. Trabajo de grado, Universidad de los Andes. Recuperado de <https://documentodegrado.uniandes.edu.co/documentos/6854.pdf>
- Gervilla, A. (2010). *Familia y educación familiar: conceptos clave, situación actual y valores*. Madrid, España: Narcea Ediciones.
- Gómez, G. A. & Montoya, R. (2011). Análisis sobre el derecho a la pensión de sobrevivientes entre varias compañeras permanentes del afiliado o pensionado fallecido en la legislación vigente. Trabajo de grado especialización, Universidad de San Buenaventura. Recuperado de http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/463/1/An%C3%A1lisis_Sobre_Vigente_Montoya_2011.pdf
- Jaramillo, I. C. (2013). *Derecho y familia en Colombia: Historias de raza, género y propiedad (1540-1980)*. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.
- Llano, J. V. & Velasco, N. (2016). Derechos fundamentales: Un debate desde la argumentación jurídica, el garantismo y el comunitarismo. *Novum Jus*, 10(2), pp. 35-55. Universidad Católica de Colombia. Recuperado de http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/1317/1250
- Medina, J. E. (2014). *Derecho civil, derecho de familia (4ª ed.)*. Bogotá, Colombia: Universidad del Rosario.

- Moliner, (2013). *La familia como espacio de socialización de la infancia*. México: Universidad Interamericana para el Desarrollo. Recuperado de <http://www.uam.mx/cdi/derinfancia/4moliner.pdf>
- Muñoz, G. (2014). Evolución del concepto de familia y su recepción en el ordenamiento jurídico. Tesis de grado maestría, Universidad de Chile. Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116109/demu%C3%B1oz_g.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Palacios, J. & Rodrigo, M. J. (Cords.). (2014). *Familia y desarrollo humano*. Madrid, España: Alianza editorial.
- Rodríguez, R. (2014). *Estudios sobre seguridad social*. Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte.
- Rodríguez, J. O. & Rodríguez, L. O. (2014). *Concepto jurídico del núcleo familiar: un estudio sobre los “grupos familiares” – sub-judice*. Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia. Recuperado de <http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2105/1/Concepto-jur%C3%ADdico-del-n%C3%BAcleo-familiar.pdf>
- Salazar, L. J. (2015). *Derecho a la pensión de sobreviviente, para los hijos de crianza en el actual Sistema General de Pensiones*. Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2701/1/DERECHO%20A%20LA%20PENSI%C3%93N%20DE%20SOBREVIVIENTE,%20PARA%20LOS%20HIJOS%20DE%20CRIANZA.pdf>
- Silva, M. A. (2014). *Cartilla de derecho de familia para no abogados*. Trabajo de grado especialización, Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/14901/SilvaMartinezMarianaAndrea2014.pdf?sequence=1>

Vela, A. C. (2015). *Del concepto jurídico de familia en el marco de la jurisprudencia constitucional colombiana: un estudio comparado en américa latina*. Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia. Recuperado de <http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2746/1/DEL%20CONCEPTO%20JURIDICO%20DE%20FAMILIA.pdf>

Jurisprudenciales:

Corte Constitucional, Sentencia T-049, expediente T-182058, del primero de febrero de 1999. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

Corte Constitucional, Sentencia C-1035 del 22 de octubre de 2008, expediente D-7238. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sentencia C-577 del 22 de julio de 2011, expedientes acumulados D-8367 Y D-8376. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala sexta de revisión, Sentencia T-074 del 27 de septiembre de 2016, expediente T-5.454.638. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sentencia T-525 del 22 de febrero de 2016, expediente T-5.881.147. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Cuarta de revisión, Sentencia T-316 del 12 de mayo de 2016 expediente T-5.085.945. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo. Bogotá, Colombia.

Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Radicación N° 19001-23-31-000-2008-00244-01 del 25 de septiembre de 2008. Consejera Ponente: Lilia López Díaz. Bogotá, Colombia.

Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
B. Radicación N° 19001-23-31-000-2001-00757-01(31252), del 11 de julio de 2013.
Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. Bogotá, Colombia.